

## **Soberanía, elecciones y crisis laborales: el nuevo campo de batalla político rumbo a 2027**

México entró oficialmente en modo electoral, aunque las campañas todavía no comienzan. La disputa política dejó de ser una discusión de declaraciones aisladas y se convirtió en una batalla abierta por el control de la narrativa nacional. Seguridad, soberanía, crimen organizado, elecciones y conflictos laborales son ahora piezas del mismo tablero político.

El choque más fuerte del día se concentró entre Morena y la oposición por los casos de Chihuahua y Sinaloa. El oficialismo intensificó su ofensiva contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que trascendiera la presunta participación de agentes de inteligencia estadounidenses en un operativo para dismantelar un narco-laboratorio. Morena sostiene que hubo una violación a la soberanía nacional y ya empuja acciones políticas y legales contra la mandataria estatal.

La oposición respondió con una estrategia igual de agresiva: exigir la desaparición de poderes en Sinaloa tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros actores políticos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.

La confrontación subió de nivel porque ambos casos tocan uno de los temas más sensibles para cualquier gobierno: la legitimidad. Morena intenta posicionar la idea de que los gobiernos estatales opositores actúan fuera de la coordinación federal y permiten injerencia extranjera. El PAN y sus aliados buscan instalar la narrativa contraria: que el gobierno federal protege políticamente a personajes señalados por autoridades estadounidenses.

En medio del conflicto, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender la relación bilateral con Estados Unidos y aseguró que existen grupos interesados en deteriorar el vínculo entre ambos países. También rechazó las versiones sobre operaciones activas de la CIA en México y reiteró que la relación con Washington se mantiene bajo términos de respeto y cooperación.

Mientras tanto, otro tema comenzó a mover el tablero político: la elección judicial. El Instituto Nacional Electoral advirtió que organizar simultáneamente las elecciones judiciales y las elecciones federales de 2027 podría generar una operación electoral

gigantesca y extremadamente costosa. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, planteó aplazar la elección judicial hasta 2028 para ahorrar cerca de 2 mil millones de pesos y reducir riesgos logísticos.

La propuesta abrió una discusión incómoda para el oficialismo. La reforma judicial fue presentada como una transformación histórica, pero ahora enfrenta problemas técnicos, presupuestales y operativos que obligan a reconsiderar tiempos y mecanismos de aplicación.

En paralelo, Morena, PT y Partido Verde confirmaron que mantendrán su alianza rumbo a 2027. El bloque gobernante anunció nuevos filtros internos para impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado, incluyendo revisiones de antecedentes penales y consultas con autoridades federales. El mensaje es claro: el tema de seguridad será central en las próximas elecciones y ningún partido quiere cargar con candidatos cuestionados.

Pero la presión política no se limita al terreno electoral. También comenzaron a encenderse focos rojos en el ámbito sindical y laboral.

La huelga en JK Tornel alcanzó ya 68 días. El sindicato exige cumplimiento inmediato de prestaciones laborales y cláusulas contractuales relacionadas con jornadas laborales, aguinaldos y seguridad social. La empresa propone implementar mejoras gradualmente durante los próximos tres años, propuesta que los trabajadores rechazan por considerar que representa un retraso injustificado en derechos ya pactados.

El conflicto refleja algo más profundo: sindicatos con mayor disposición a sostener presiones prolongadas y empresas enfrentando mayores costos laborales en un contexto económico complejo.

En el sector salud también apareció una alerta delicada. Reportes señalan que empresas de limpieza con contratos vinculados a instituciones públicas como ISSSTE e IMSS-Bienestar tendrían miles de trabajadores sin registros formales ante el IMSS. De confirmarse, el caso podría derivar en investigaciones laborales, fiscales y administrativas, además de abrir un debate sobre las condiciones reales de trabajadores subcontratados en servicios esenciales.

El escenario comienza a dibujar una nueva realidad política para México: cada conflicto laboral puede convertirse en crisis pública, cada decisión administrativa tiene impacto electoral y cada tema de seguridad se transforma automáticamente en disputa política nacional.

La carrera rumbo a 2027 ya comenzó. Y todo indica que será mucho más ríspida de lo que muchos imaginaban.